Ni guerra ni paz en Colombia

Frédéric Massé

▶ **To cite this version:**

Frédéric Massé. Ni guerra ni paz en Colombia. Les Études du CERI, 2020, 245-246, pp.25 - 31. hal-03578877

HAL Id: hal-03578877
https://sciencespo.hal.science/hal-03578877

Submitted on 17 Feb 2022

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Ni guerra ni paz en Colombia

Frédéric Massé

En Colombia, el año que acaba de terminar habrá sido una vez más, muy agitado y complicado. Por ser muy refrito, este diagnóstico se ha vuelto casi trivial e insignificante. Aun así, los acontecimientos del año 2019 no fueron para nada banales: atentado del ELN en contra de la escuela de Policía Santander y decisión del presidente Duque de poner fin a las negociaciones de paz con esa guerrilla en enero; crisis diplomáticas con Venezuela y Cuba en febrero; rumores persistentes de intervención militar en contra del régimen de Nicolas Maduro (marzo-abril-mayo); liberación y nueva detención de Hernández Solarte alias Jesús Santrich (mayo-junio) seguida por la renuncia del fiscal general de la Nación (mayo); anuncio oficial de retoma de armas por parte de antiguos comandantes de las FARC (de los cuales el número 2, Iván Márquez, y Jesús Santrich) el 28 de agosto; comparecencia del expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema por falsos testimonios el 8 de octubre; renuncia del ministro de defensa después de diversos escándalos y polémicas sobre su gestión, el 6 de noviembre; gigantescas manifestaciones y cacerolazo en contra del gobierno Duque, seguido de graves disturbios, un toque de queda y sucesivas protestas a finales de noviembre…

De acuerdo con los más escépticos, Colombia habría regresado 20 años atrás. El proceso de paz habría nacido muerto y el país se habría vuelto ingobernable. Por el lado del gobierno y de sus partidarios, la lectura es bastante diferente, obviamente. Según ellos, el presidente Duque no habría sino corregido algunos errores del pasado y el país estaría en vía de estabilización.

Mas allá de las divisiones ideológicas, no siempre es fácil hacerse una idea, ya que las cifras contrastan: reanudación de los combates y aumento de la violencia y de los asesinatos políticos en numerosas regiones, producción récord de cocaína, afluencia masiva de ciudadanos venezolanos, o aumento del desempleo, por un lado; indicadores de violencia a nivel nacional en su nivel más bajo desde la década de los 70's[1], crecimiento económico que sube a 3.4%, ingreso a la OCDE y mejoramiento del índice de competitividad del país[2], renovación política en las grandes ciudades colombianas en las elecciones locales y regionales del 27 de octubre pasado, por el otro lado. En esas condiciones, resulta difícil de ver la situación con claridad, aún más cuando esta dependerá también de lo que sucede en Venezuela.

Si agregamos a este cuadro los problemas de gobernabilidad que enfrenta el gobierno y su limitado margen de maniobra, podemos entender mejor por qué, tres años después de la firma de los acuerdos de paz, de nuevo es posible dudar de la capacidad de Colombia para cerrar definitivamente el capítulo de la guerra y así evitar que la historia tartamudee.

[1] Desde la firma de los acuerdos de paz, la tasa de homicidio se ha reducido drásticamente. De 34 homicidios por 100 000 habitantes en 2012, se redujo a 24 por 100 000 el año pasado. Se observa lo mismo para el número de personas secuestradas: 3000 secuestros al año en 2012 contra menos de 40 en 2019.

[2] "Colombia mejora en competitividad", *El Espectador*, 9 de octubre de 2019.

¿Un proceso de paz maltratado?

En octubre de 2016, el No al plebiscito reveló una sociedad colombiana profundamente dividida en cuanto al tema de la paz. Tres años después, los colombianos siguen no solamente divididos, sino que los últimos acontecimientos parecen haber exacerbado la polarización de la sociedad.

Para los más detractores de los acuerdos de paz, el año 2019 no habría sino confirmado lo que decían desde tiempo atrás: las FARC nunca tuvieron realmente la intención de lograr la paz. Ya se les reprochaba su renuencia a arrojar luz sobre sus crímenes pasados y pedir perdón a sus víctimas. También se sospechaba que habían ocultado parte de sus bienes a través de testaferros. Se les criticaba finalmente por su falta de colaboración con las autoridades colombianas y norteamericanas en materia de lucha contra el narcotráfico. Para los opositores más endurecidos contra la antigua guerrilla, el anuncio de la retoma de armas por parte de Iván Márquez y sus acólitos era por lo tanto solo la continuación lógica y predecible de una traición planificada. Para los defensores del proceso de paz, al contrario, es por el lado del expresidente Uribe y del actual presidente Duque, que se deben buscar las causas de los reveses del proceso de paz: objeciones al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP)[3], celeridad para extraditar a Jesús Santrich por narcotráfico y levantar restricciones sobre el uso de glifosato para fumigaciones aéreas, demoras administrativas en la reparación de las víctimas y en el desarrollo de proyectos productivos colectivos para ex guerrilleros, reducción del presupuesto asignado a la reforma rural integral[4]. Al tratar constantemente de cuestionar los acuerdos de paz, ellos serían los principales responsables del descontento y de las frustraciones de aquellos comandantes de las FARC, quienes, al sentirse traicionados por el gobierno, anunciaron la reanudación de la lucha armada.

En este contexto, en 2019 las voces moderadas lucharon para hacerse oír. Del lado de la "comunidad internacional", el tono adoptado fue en general moderado, pero la mayoría de ellos se mantuvieron cautelosos. En octubre de 2019, el ex subsecretario de Estado y enviado especial de Barack Obama para el proceso de paz en Colombia declaraba, por ejemplo: "la implementación de los acuerdos de paz está teniendo éxito" al mismo tiempo que expresaba una serie de preocupaciones y reiteraba su aliento al gobierno del presidente Duque y a la comunidad internacional para que continúen sus esfuerzos a favor de la implementación de la integralidad de los acuerdos de paz[5].

Misma versión, aunque quizá un poco más moderada del lado del Instituto Kroc (Universidad Norte-Dame, Estados Unidos) encargado de vigilar la implementación de los acuerdos de paz, o de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. En el transcurso del año 2019, señalan, se han logrado avances, pero el progreso sigue siendo insuficiente y persisten preocupaciones. En términos menos diplomáticos, el balance es cuando menos mixto[6].

[3] Uno de los episodios más significativos de las tensiones en torno a los acuerdos de paz fue las objeciones presentadas por el gobierno de Iván Duque en contra de la JEP, objeciones que fueron finalmente rechazadas por la Corte Constitucional, y de las cuales muchos analistas concordaban en decir que todo o parte pondría en tela de juicio el frágil equilibrio que se había negociado entre justicia y paz.

[4] "La Reforma rural ya no sería 'integral' por estos recortes del Gobierno", *El Espectador*, 10 de octubre de 2019.

[5] B. Aronson, "Colombia's Peace Agreement is Succeeding", *Wall Street Journal*, 16 de octubre de 2019

[6] Ver por ejemplo el tercer informe de instituto Kroc de abril 2019, **https://kroc.nd.edu/assets/316152/190409_**

Nunca es fácil hacer un balance, aun parcial, de cualquier proceso de paz, porque más allá de los debates metodológicos y de las ilusiones heroicas, las distorsiones cognitivas —prismas ideológicos, expectativas excesivas— suelen impedir distinguir entre lo que tiene que ver con la falta de voluntad política y lo que incumbe más bien a dificultades inherentes a cualquier proceso de paz. Por otro lado, la cuestión de la selección de los indicadores y de los hechos y cifras a tomar en consideración tampoco es fácil. ¿En que debe centrarse uno primero? ¿En los tres mil doscientos guerrilleros desmovilizados presentes en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) o en los ocho mil que los abandonaron[7]? ¿En el hecho de que la gran mayoría de ellos continúan suscribiendo, mal que bien, los acuerdos de paz, o por el contrario, en los 10-15% de individuos que retomaron la lucha armada? ¿Y qué hay de los treinta y cinco proyectos productivos implementados desde la firma de los acuerdos de paz, que benefician a los excombatientes? ¿Representan realmente un esfuerzo para la reincorporación o son más bien el reflejo de las expectativas frustradas, de las demoras administrativas, y de las dificultades en la identificación, selección y financiación de esos proyectos? ¿Y qué hay finalmente de los avances en la JEP y en la Comisión de la Verdad? ¿Deberíamos alegrarnos por el hecho de que al fin vieron la luz —aunque su funcionamiento sigue siendo lento y problemático— o deberíamos por el contrario deplorar las acusaciones de parcialidad y otras disfunciones de las que son objeto? Entre los que piensan que la botella esta medio llena y los que prefieren verla media vacía, la frontera a veces es tenue.

Ante los temores sobre el futuro del proceso de paz, también surgieron iniciativas de la sociedad civil para defender la paz[8]. Sin embargo, tuvieron un eco limitado, ya que la coyuntura no ayudó. Primero, las divisiones dentro de la antigua guerrilla y el abandono del proceso de paz por parte de algunos de sus exdirigentes socavaron la legitimidad del nuevo partido político derivado de la guerrilla. Esta fuerza denominada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, está al borde de la implosión y su influencia solo parece basarse en su condición de parte signataria de los acuerdos de paz. Como resultado, la capacidad de sus líderes más moderados está reducida[9]. Luego, la evolución de la situación de seguridad. En muchas regiones del país, la violencia está en aumento, los combates se reanudaron y para la gente que vive en esas regiones a menudo remotas, la paz se ha convertido en un sueño imposible. Finalmente, la situación en Venezuela y las amenazas de intervención militar, parecen haber relegado la implementación de los acuerdos de paz al trasfondo de las preocupaciones de la opinión publica colombiana y de la comunidad internacional.

---

pam_media_advisory_final.pdf, así como el informe de la Misión de Naciones unidas en Colombia, con fecha del 1 de octubre de 2019: **https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_-_n1928700.pdf**

[7] Seguin las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la fecha del 31 de julio de 2019, quedaban 3220 excombatientes en las ETCR.

[8] Por ejemplo, « Defendemos la Paz ».

[9] El jefe del partido, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, condenó con firmeza el anuncio de retoma de las armas por parte de Iván Márquez, acusándolo de triple traición: a Colombia, al movimiento político de la FARC y a la comunidad internacional. Sin embargo, los retrasos del partido para excluir a estos nuevos disidentes de sus filas habrían vuelto a poner en duda la voluntad real de otros dirigentes desmovilizados de pasar la página de la lucha armada.

Nuevas tensiones de seguridad

A finales de 2018, un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señalaba que aún existían cinco conflictos armados en Colombia[10]. Es difícil acusar el CICR de una lectura política de la situación, ya que su análisis es ante todo jurídico, en vista del derecho humanitario. Sin embargo, volver a hablar de conflicto armado —y no solo de uno sino cinco— puede ser sorprendente, porque después de la firma de los acuerdos de paz, las FARC se desmovilizaron en su gran mayoría y todas las cifras de violencia relacionadas con el conflicto armado disminuyeron a nivel nacional.

El informe señala una aparente contradicción. Desde la firma de los acuerdos de paz, la situación estaría en vía de estabilización incluso de normalización, pero el país en su conjunto está aún lejos de ser pacificado. En algunas regiones asistimos en realidad a una reconfiguración de las alianzas beligerantes, ya que el espacio que dejo vacante la desmovilización de las FARC precipitó la reanudación de la lucha entre grupos armados ilegales por el control de territorios considerados estratégicos.

En 2019, diferentes factores acentuaron esa tendencia. Si bien se calculaba que el número de disidentes de las FARC después de la firma de los acuerdos de paz superaba apenas los tres cientos, hoy en día habría superado los dos mil combatientes, y eso aún antes de la retoma de armas anunciada por Iván Márquez[11]. Por otra parte, en tres años el ELN habría crecido de mil quinientos combatientes a más de dos mil quinientos[12], y el Ejército Popular de Liberación (EPL) también habría sobrevivido y se habría establecido en nuevas regiones[13]. Del lado de los grupos armados ilegales provenientes de los grupos paramilitares, aunque el más grande de ellos (el Clan del Golfo) se ha debilitado considerablemente por la operaciones de las fuerzas armadas en contra de ellos (Operaciones Agamenón I y II), parece sin embargo resistir. En cuanto a las demás estructuras criminales en armas que aparecieron esos últimos años (Caparrapos, Pachelly, Constru, Pachenca, etc.), su arraigo a nivel local ya se ha convertido en una realidad[14].

En 2019, otros factores agravantes vinieron a complementar las filas ya bastante llenas de los actores armados ilegales que operan en Colombia: la creciente presencia de los carteles mexicanos en gran parte del territorio colombiano, por un lado; la liberación de más de cien

[10] CICR, *Cinco conflictos armados en Colombia ¿qué está pasando?*: **www.icrc.org/es/document/cinco-conflictos-armados-en-colombia-que-esta-pasando**

[11] Ver, por ejemplo, el informe de la Fundación Paz y Reconciliación, «Más sombras que luces». Sin embargo, cabe señalar que la disidencia no está unificada. De los 23 grupos existentes provenientes de las antiguas FARC-EP, solo un centenar de combatientes perteneciendo a los frentes 18, 28 y 36 de la antigua guerrilla se habrían unido a Iván Márquez. Para un análisis sintético sobre la capacidad de los grupos disidentes a perdurar, ver, por ejemplo, E. Pizarro, "¿Han tenido éxito las disidencias guerrilleras?" *El Tiempo*, 26 de octubre de 2019.

[12] Sin contabilizar el número —difícil de estimar— de los venezolanos reclutados estos últimos años, que operan en territorio venezolano. Dicho eso, las opiniones divergen sobre el hecho de si el ELN pudo realmente extender su influencia en zonas anteriormente copadas por las FARC. Ver, por ejemplo, "Sin negociación, ¿aumentó la violencia del ELN?", *Revista Semana*, 18 de julio de 2019.

[13] Replegados desde varios años con unos 100 hombres en la región del Catatumbo, se informó recientemente de su presencia en el Norte del Cauca. Sin embargo, ahora, esta organización se considera más como una banda criminal que vive del narcotráfico. Fue renombrada y lleva el nombre poco halagador de Los Pelusos.

[14] Ver, por ejemplo, A. Ávila, "¿Quién es quién en la violencia del posconflicto?", *Revista Semana*, 28 de julio de 2019.

exjefes paramilitares, quienes después de su extradición y de haber cumplido sus condenas en cárceles norteamericanas, regresaron al país, algunos de ellos muy determinados a reanudar sus actividades y a recuperar sus bienes, por el otro[15]. El mes de octubre pasado, reaparecieron por primera vez en mucho tiempo, unos panfletos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia, declarando objetivo miliar a todo lo que se acerca de una forma u otra a las disidencias de las FARC y al ELN[16].

Otra constante y preocupación, después de cuatro años de un aumento muy fuerte, seguido de cierta estabilización en el año 2018, las cifras de producción de cocaína se mantuvieron en niveles muy altos en 2019[17].

Finalmente, la situación fue aún más pesada y preocupante ya que los asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, por un lado, y de excombatientes de las FARC por el otro, continuaron a un ritmo sostenido: más de 155 para los primeros y 52 para los segundos[18]. Sin embargo, a finales de julio de 2019, el gobierno provocó una polémica con la publicación de un informe, en que se afirmaba que esa tendencia había disminuido después de la elección de Iván Duque[19]. Por otra parte, las autoridades parecen querer seguir haciéndose los de la vista gorda ante la sistematicidad de esos asesinatos, porque si bien los autores y motivos de esos crímenes son diversos, el hecho es que las principales víctimas siguen siendo los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que denuncian la corrupción, los escándalos políticos y la presencia de organizaciones criminales involucradas en todo tipo de tráfico.

… y regionales

A lo largo del año 2019, los venezolanos continuaron huyendo masivamente para tratar de escapar a la crisis política, económica y humanitaria en su país. A finales del mes de agosto 2019, Colombia tenía más de un millón y medio de venezolanos en su territorio, según las autoridades. Aunque hasta entonces, esos flujos migratorios habían sido relativamente bien absorbidos por la sociedad colombiana, en 2019 esa solidaridad empezó a desmoronarse,

[15] De los cuales, algunos nombres tristemente famosos en los años 2000: el alemán, Julián Bolívar, Diego Vecino, HH, Gordo Lindo, Macaco, Fritanga… Ver, por ejemplo, "Los capos paramilitares que regresan a Colombia", *Revista Semana*, 15 de septiembre 2019.

[16] Las autoridades colombianas desmintieron inmediatamente la autenticidad de esos panfletos, pero queda la duda.

[17] Las cifras oficiales aún no se conocen, pero todo sugiere que se han mantenido muy altas. Para el año 2018, el número de hectáreas de cultivos de coca había disminuido muy ligeramente en comparación con el año 2017, pasando de 170.000 a 168.000, o sea un reducción del 1.2%, pero, en cambio, la producción de cocaína había aumentado un 5.9%, y alcanzado la cifra récord de 1200 toneladas según cifras de UNOCD. Para que conste, en 2013, el número de hectáreas cultivadas se había reducido a 48.000 hectáreas.

[18] Cifras al 30 de septiembre de 2019. Aunque las cifras difieren un poco según las fuentes, son más de 700 líderes sociales y 137 excombatientes que fueron asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. El pasado 24 de octubre, y por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz, un exguerrillero fue asesinado adentro mismo de un ETCR, aunque estos espacios están protegidos por la fuerza pública.

[19] **www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2019/Documents/INFORME%20LDDH%20ACTUALIZADO%2017%20DE%20JULIO_V2.pdf**. Para una lectura crítica de esas cifras, ver por ejemplo, R. Uprimmy, "Errores fatales: sobre la supuesta reducción de asesinatos de líderes con Duque", *La Silla Vacía*, 10 de agosto de 2019.

por lo que los colombianos empezaron a acusar a los venezolanos de estar al origen de todos los males del país (delincuencia, desempleo, prostitución…).

En el ámbito diplomático, la situación en Venezuela también provocó una gran tensión en la región. Tras el reconocimiento del autoproclamado presidente Juan Guaidó por parte del presidente Iván Duque, el 23 de enero de 2019, Venezuela y Colombia volvieron a romper sus relaciones diplomáticas. En las siguientes semanas, la tensión subió aún más, mientras se especulaba sobre una posible intervención militar en el país vecino[20]. Contra todo pronóstico, el régimen de Nicolás Maduro, se ha resistido. El 11 de septiembre de 2019, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) (re)activó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al considerar que la situación en Venezuela representaba de aquí en adelante una amenaza a la paz y a la seguridad regional[21]. Esta decisión despertó fuertes críticas entre la clase política colombiana, una parte acusando al gobierno de Iván Duque de jugar con fuego y de trabajar para Estados Unidos.

El 16 de enero de 2019 el atentado con carro bomba del ELN en contra de la Escuela de Policía Santander no solo puso fin a las negociaciones con la guerrilla, sino que también dio un duro golpe a las relaciones bilaterales entre Colombia y Cuba. Luego de ese atentado que mató a 22 personas, Bogotá exigió la extradición de los dirigentes del ELN quienes estaban en Cuba para negociar con los representantes del gobierno colombiano. La Habana se negó categóricamente. Recordando su condición de país anfitrión y su papel como garante del proceso de paz, el gobierno cubano justificó su negativa al invocar el estricto cumplimiento de los protocolos firmados en caso de que se rompan las negociaciones. No obstante, el gobierno colombiano continuó impugnando la validez de esos protocolos y exigiendo la extradición de los dirigentes del ELN. En protesta, Colombia incluso se abstuvo en la votación en la Asamblea general de las Naciones Unidas sobre el levantamiento del embargo de Estados unidos contra Cuba, el pasado 7 de noviembre. Una primicia desde que esa votación tiene lugar en 1992. Para algunos, el gobierno colombiano habría hecho eso para ayudar al gobierno de los Estados Unidos, que después de que la Administración Obama lo sacó, buscaría poner nuevamente a Cuba en la lista de países que apoyan a las organizaciones terroristas.

Entre esperanzas y preocupaciones

Tres años después de la firma de los acuerdos de paz, Colombia está nuevamente en medio de la duda, especialmente porque, desde que asumió el cargo en agosto de 2018, el presidente Iván Duque se enfrenta a una crisis de gobernabilidad y una falta de visibilidad. Atrapado

[20] Entre todos los escenarios discutidos en un intento por encontrar una solución a la crisis en Venezuela, no está claro si la Administración estadunidense consideró seriamente la intervención armada. Todos los casos fueron sin lugar a dudas estudiados. Se habría incluso tenido «negociaciones secretas» con unos representantes del régimen de Maduro. Pero cuando el gobierno de Donald Trump anunciaba el retiro de las tropas estadunidenses de Irak y de Siria y a unos pocos meses de elecciones presidenciales en las que pondrá en juego su mandato, también podemos pensar que Donald Trump consideró conveniente esperar, prefiriendo así evitar que soldados estadunidenses sean asesinados en un nuevo conflicto. El despido el 10 de septiembre de 2019 de su consejero para la seguridad nacional John Bolton, firme defensor de una intervención armada, parece respaldar esa hipótesis.

[21] 12 países votaron a favor, 5 se abstuvieron y las Bahamas y Cuba no participaron en la votación.

entre aquellos que, en su propio campo, continúan sacudiendo el fantasma del castrochavismo, y una izquierda radical, que intenta —sin realmente tener éxito— aprovechar el aumento del descontento, su gobierno tiene dificultad para hacer avanzar las cosas. En 2019, las repercusiones de los escándalos de corrupción en el seno de la clase política y del sistema judicial[22] también aumentaron la desconfianza de los ciudadanos hacia sus élites.

Al contrario de los pronósticos, esta desconfianza resultó en un voto más independiente y en una renovación política en las grandes ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta) durante las elecciones regionales del pasado 27 de octubre. Y aunque esa recomposición del panorama político fue todavía muy tímida (mismas familias políticas, mismos clanes familiares) en muchas regiones del país —la prácticas clientelistas y mafiosas (corrupción, compra de votos, violencia política) todavía no han desaparecido—, estas elecciones mostraron que, a pesar de las dificultades, el cambio era posible y muchos colombianos volvieron a recuperar la esperanza.

A final del año 2019, muchos colombianos consideraban que el gobierno se había quedado sordo ante sus reivindicaciones. Y luego de la llamada a un paro general para el 21 de noviembre, cientos de miles de colombianos salieron a la calle durante varios días para manifestar su descontento y reclamar más avances en la implementación de los acuerdos de paz y la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y en el ámbito económico y social y de lucha contra la corrupción.

Hoy en día, Colombia parece estar dividida entre la esperanza y las preocupaciones, y los acontecimientos del año 2019 nos recuerdan una vez más que la transición de la guerra a la paz no es nunca fácil y que nada está escrito por anticipado. Tres años después de la firma de los acuerdos de paz el país se debate entre la necesidad de cumplir con esos acuerdos y de responder a las ocho millones de víctimas del conflicto armado, y la voluntad de modernizar el país. Claro, no es fácil conciliar los objetivos propios a la consolidación de la paz, con aquellos más relacionados con el desarrollo. Asimismo, "mantener y consolidar la paz sin paz" es un verdadero desafío. En lo inmediato, el gobierno Duque debe también y sobre todo evitar que el país no vuelva a hundirse en un conflicto armado[23]. Por el momento, la situación actual - una especie de "ni guerra ni paz" ilustra lo que Julien Freund recordaba en su prólogo al libro de Georg Simmel, *El Conflicto*: "el conflicto permanece latente en la paz. La paz está latente en el conflicto".

[22] Odebrecht, cartel de la toga, renuncia del fiscal general de la nación y del ministro de Defensa ...

[23] O que el conflicto armado no vuelva a extenderse...